EL ESTADO MEXICANO Y SUS PERSPECTIVAS

CARLOS SIRVENT

I

La crisis económica por la que está pasando el país y que prácticamente dura ya todo el decenio pasado y lo que va del actual, ha puesto en entredicho no tanto la organización de los principios en que se funda la estructura económica como, sobre todo, la capacidad del Estado para corregirla y el marco político en que ha funcionado hasta hoy.

La caída incontenible de la producción, la inflación incontrolable, el creciente desempleo, etcétera, constituyen los indicios de una estructura económica muy deteriorada que alienta la crítica y fija la atención sobre el Estado, poniendo en duda su papel como benefactor y alentador del desarrollo económico.

Lo que la crisis pone en discusión no es el carácter mismo de la economía sino el intervencionismo estatal, que ya no parece capaz de fundar el crecimiento en los términos que promovió por más de 40 años.

Esta importancia mayor a los factores políticos que a los netamente económicos se debe a que en México el funcionamiento de la vida económica se explica como un factor derivado de la vida política. Por ello, como veremos más adelante, los últimos gobiernos han enfrentado la crisis a partir de reformas o impulsos políticos.

II

Distintos autores que han estudiado la formación del Estado actual coinciden en atribuirle al aparato político el papel fundamental que ha operado las transformaciones y delineado el carácter del México posrevolucionario.

Unos atribuyen a la fortaleza del Poder Ejecutivo y al poder de decisión que la Constitución le otorga, particularmente a través de los Artículos 27 y 123, la dirección e integración al Estado de distintos sectores organizados de la población, cuyos intereses son adoptados en los programas gubernamentales (Córdova, 1972: 19 y 45).

Otros, al hacer referencia al movimiento obrero afirman que si

bien han habido iniciativas políticas, movimientos, valores y símbolos que se han desarrollado fuera del Estado, "La organización del proletariado en México se ve auspiciada y regulada desde muy temprano por el Estado" (Camacho, 1980: 21).

De la misma manera, al pasar a la estructura económica mexicana parece imposible explicar el proceso de industrialización y el crecimiento sin considerar el papel del Estado como empresario y como administrador y aun en los casos en que los autores destacan el papel principal del empresario reconocen el lugar fundamental que ha ocupado el intervencionismo estatal (Derossi, 1977; Reynolds, 1970).

De lo que estamos hablando en México es, en suma, de un Estado ampliado que desde los inicios del régimen posrevolucionario fundió en un solo proyecto la doble lógica de apoyar el desarrollo y la acumulación del capital y al mismo tiempo impulsar el carácter popular o benefactor de dicho intervencionismo.

Fue desde su origen lo que Claus Offe, al definir al Estado benefactor del capitalismo actual, ha llamado la doble función paralela de apoyar la formación de capital y mantener la legitimidad (Claus Offe, 1977: 62-87).

La explicación a la temprana vocación del Estado por ampliarse se encuentra en el proceso mismo de la Revolución mexicana y en el desgaste generalizado de las clases sociales en pugna, incapaces de regular y ordenar por sí mismas a la nueva sociedad, cediendo la tarea al sector público que desde entonces definió a la sociedad civil como Estado ampliado.

En este sentido, es posible afirmar que México no pasó por un período de autorregulación entre privados (con excepción hecha del período armado de la Revolución) que con el tiempo fuera sustituido por lo público; a la inversa, desde la Revolución el nuevo Estado tomó a su cargo la reconstrucción de la sociedad y paulatinamente, a lo largo de más de 40 años y como consecuencia de las estrategias sexenales, entregó grandes áreas de decisión del sector económico al juego privado. Este cambio hacia la privatización fue muy claro para autores como González Casanova, quien en 1979, alarmado, afirmaba que el desarrollo más probable para México "no es el que conduzca a un Estado-nación dentro del capitalismo más avanzado, sino al de una región dominada por los monopolios en que los remanentes nacionales de gobierno, ejército, ideologías y cultura dominantes sólo operen como mediadores de una burguesía nacional e internacional altamente integrados entre sí y con el propio Estado". "En este sentido" -continúa diciendo- "es imposible descartar crecientes enfrentamientos entre los aparatos de masas del Estado, en el interior de los mismos, y entre los grupos que presionan por la política de liberalismo económico o, dicho de otro modo, entre los que preconizan una mayor participación del Estado y una mayor participación de las organizaciones de masas en el Estado y los revanchistas conservadores que hoy defienden la política más reaccionaria de los monopolios preconizando un liberalismo económico a ultranza" (Pablo González Casanova, 1979: 405-419).

Sin embargo, justamente cuando González Casanova afirmaba lo anterior, la realidad se movía en un sentido diferente, pues con la agudización de la crisis económica y la explotación intensa del petróleo por parte del gobierno se inició un cambio estratégico que permitió recuperar para el Estado la vida económica, hasta culminar con la nacionalización de la banca que pospuso para otra ocasión la hipótesis de un Estado débil en manos de los monopolios.

Ш

A partir de las interpretaciones anteriores se presentan en México tres grandes marcos políticos dentro de los cuales se agitan organizaciones diversas.

Por un lado, la concepción que atribuye los problemas actuales a la sociedad estatalizada y al fracaso del Estado, que se ha vuelto cada día más incapaz de regular y administrar las crecientes demandas sociales, llegando a la paradoja de un Estado ampliado, productor de la sociedad civil que, a la vez, por su incapacidad administrativa pasa a una posición de impotencia y debilidad. El resultado es una carga constantemente creciente de expectativas, obligaciones y responsabilidades a las cuales el gobierno se ve enfrentado sin poder eludirlas (Claus Offe, 1981: 1849).

Este planteamiento que fuera del país ha sido asumido por el nuevo análisis de izquierda que habla del Estado débil, comprueba la crisis del Estado benefactor que se debate entre el apoyo a la acumulación de capital y las crecientes demandas sociales. Sin embargo, en México se ha transformado en un instrumento excelente en manos de la derecha, que olvidando el hecho histórico de que el Estado venía retrocediendo en los últimos años ante la fuerza del capital privado le atribuye a su carácter intervencionista las derrotas actuales, planteando la vuelta a un nuevo orden privado y liberal, espontáneo y autorregulado.

En contraposición, en una concepción que podríamos calificar como de izquierda, se establece como prioritario el Estado ampliado y como causa de la ingobernabilidad lo que en su momento Poulantzas llamó "pilotaje a simple vista" o "ausencia de proyecto global de sociedad" derivado de las estructuras capitalistas, lo cual tarde o tem-

prano concluirá en una crisis de legitimación (Habermas), crisis de Estado (Poulantzas), crisis de gobernabilidad (Donolo y Fichera), crisis del Estado (Ingrao) o crisis de la democracia (Huntington) (Mouffe, 1981: 11).

IV

En oposición a las dos vías anteriores, el gobierno actual establece un tercer camino sumamente polémico que ha ido transformándose en el proyecto del sexenio actual.

Por un lado, en contra del desmantelamiento del Estado social o benefactor sostiene la rectoría del Estado como principio para salir de la crisis, manteniendo la dirección de la economía a través de un sector público capaz de conducir las actividades nacionales e imponiendo a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; por otro, propone un proyecto racionalizador de planeación que milita en contra del empirismo político y pretende vincular lo existente con un objeto futuro que se trata de convertir en realidad: la sociedad posible (Camacho, 1974: 77-100).

Paralelamente a la defensa de la rectoría del Estado y a la planeación, recoge las críticas y los problemas que el intervencionismo de Estado ha producido: burocratización centralista e ineficiente, corrupción y autoritarismo, a lo cual contrapone como proyecto la descentralización, la renovación moral y la participación democrática (véase entre otros, el "Plan Básico 1982-1988" y "Plataforma Electoral IEPES", PRI, 1982; así como el "Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988" y el "Primer informe de gobierno 1983").

Todo ello, orgánicamente integrado, constituye la concepción general que anima al gobierno y que se traduce en estrategias y tácticas como las reformas constitucionales, la extensión de la elección mediante el principio de representación proporcional a todos los ayuntamientos de la República, globalización del ingreso y supresión del anonimato, responsabilidades de los servidores públicos, apoyo a la división de poderes informando al Poder Legislativo sobre los asuntos de la administración pública, Reforma Jurídica y de la administración de justicia, ampliación y fortalecimiento de las entidades federativas en las políticas de desarrollo regional y estatal, fortalecimiento municipal y revisión del estado que guarda la Reforma Política, instrumentación del Sistema Nacional de Control, Fiscalización y Evaluación, descentralización de la educación y los servicios de salud, etcétera, medidas todas encaminadas a articular un proyecto nacional (Reyes Heroles, 1983).

Como todo proyecto nuevo, el actual debe aún probar su viabili-

dad, abrirse espacios que lo consoliden y librar luchas para derrotar contendientes opuestos a él. Por eso vale preguntarse ¿quiénes son los verdaderos enemigos del actual proyecto gubernamental y cuáles las luchas que se han librado?

Hasta hoy, el gobierno ha sido muy claro en la visión que tiene de la arena política, abriendo tres frentes en conflicto que reflejan la voluntad política y un poder firme:

- o Uno dentro del propio Estado, en donde se intenta implantar un nuevo estilo de gobierno que no se apoya en la corrupción y en grupos hegemónicos sectorialmente. Los ejemplos más claros de este cambio son las medidas institucionales para evitar desviaciones del presupuesto y el reordenamiento sindical que se vislumbra en las organizaciones obreras del Estado.
- o Otro, donde el enemigo se perfila como una izquierda acostumbrada a negociar sus avances y a demostrar un poder que amenaza con la desorganización más que con la apertura de opciones viables. En esta perspectiva se ubican conflictos como el de la Escuela Normal Superior.
- o Finalmente, donde se encuentra el enemigo principal, que avanza por las vías institucionales y presenta un proyecto alternativo al actual gobierno: la derecha organizada en partidos como el PAN.

A diferencia del pasado en que el gobierno veía en la izquierda a su enemigo principal, la crisis y las últimas elecciones han demostrado que actualmente el gran contendiente es la derecha, que no sólo se presenta en oposición al proyecto actual anunciando el fin del Estado benefactor, sino que en las elecciones demostró que es capaz de aglutinar el descontento espontáneo de sectores urbanos medios, a través de una ideología elástica y clientelista.

Las elecciones de julio de 1983, en las que el PAN se consolidó como segunda fuerza en ascenso (16.41% de los sufragios efectivos) y el PRI se mantuvo a la baja reflejaron, más que el peligro de una derrota priísta, la capacidad del PAN para aglutinar el descontento ante la crisis, apoyándose en una ideología de carácter táctico que sin nacer inspirada en proyectos globales supo capitalizar el malestar contra la corrupción y reflejar el sentimiento de la necesidad de cambios drásticos de una población sin coherencia organizativa, pero opuesta a las medidas oficiales.

V

En la coyuntura actual en que predominan los argumentos a favor del fracaso del Estado ampliado y se habla de los límites del Estado social o interventor, por su incapacidad en el manejo de la maquinaria administrativa, el gobierno ha planteado una clara concepción del problema: por un lado, retiene la rectoría del Estado que se suponía paulatinamente perdida en el juego privado, por lo que no se puede hablar de un Estado interventor agotado en sus posibilidades; por otro lado, plantea los problemas administrativos y políticos que genera el intervencionismo estatal, como son la ineficiencia centralista, la corrupción y la absorción en el Estado de los órganos de participación. Contra ello se diseña la descentralización administrativa, la responsabilidad de los servidores públicos y el aliento a la democracia y la participación.

Lo que está a la vista, en suma, es un proyecto que supone cambios profundos, que concluyen en la descentralización del poder, en la destrucción de la corrupción como factor de cohesión política del mando y en la autonomía de las organizaciones sociales, para que dentro de un proyecto participativo se construya un nuevo Estado entendido como sociedad civil ampliada.

Bibliografía

- Camacho, Manuel: (1974), El poder: Estado y feudos políticos. La vida política en México, 1970-1973, México, El Colegio de México.
- Camacho, Manuel: (1980), El futuro inmediato, en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coordinadores), La clase obrera en la historia de México, México, Siglo XXI-IIS, UNAM.
- Córdova, Arnaldo: (1972), La formación del poder político en México, México, ERA.
- Derossi, Flavia: (1977), El empresario mexicano, México, IIS-UNAM. González Casanova, Pablo: (1979), "El desarrollo más probable" en Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coordinadores), México, hoy, México, Siglo XXI.
- Mouffe, Chantal: (1981), "Democracia y nueva derecha", en Revista Mexicana de Sociología, año XLIII, vol. XLIII, núm. 3, México.
- Offe, Claus: (1977), El Estado en el capitalismo contemporáneo, México, Siglo XXI.
- Offe, Claus: (1981), "Ingobernabilidad, el renacimiento de las teorías conservadoras" en *Revista Mexicana de Sociología*, año XLIII, vol. XLIII, núm. 3, México.
- Reyes Heroles, Jesús: (1983), "Discurso en Puebla", 15 de enero.
- Reynolds, Clark W.: (1970), The mexican economy, New Haven, Yale University Press.